



## Desalojo del campamento Alto Molle

Ya es de público conocimiento la sentencia de la Corte Suprema emanada el 9 de julio, que mandata a la Municipalidad de Alto Hospicio, en coordinación con distintos Servicios Públicos, en un plazo de 6 meses, a generar las condiciones mínimas para desalojar un predio privado ocupado por parte del campamento "Alto Molle".

Más allá de lo jurídico, este hecho ofrece una lección evidente: la enorme diferencia entre prometer hacer algo y efectivamente hacerlo.

Durante la anterior campaña presidencial, varios candidatos -entre ellos Yasna Provoste y Gabriel Boric- recorrieron campamentos de nuestra región prometiendo soluciones habitacionales o incluso la radicación de familias en terrenos tomados.

Hoy, la cruda realidad demuestra que esas promesas quedaron en nada.

Este gobierno ha mostrado una nula gestión en materia de campamentos en Tarapacá. Si su opción era construir viviendas para reducir la población asentada informalmente, el balance es claro: cero proyectos habitacionales destinados a ese objetivo. Si la vía era desalojar y recuperar terrenos, el resultado también es cero campamentos erradicados o desalojados. A veces las comparaciones parecen majaderas, pero resultan necesarias para evidenciar la diferencia entre discursos y resultados.

El Gobierno anterior -con prácticamente el mismo equipo técnico que hoy- abordó esta problemática con una política de gestión habitacional intensiva. En conjunto con

el sector privado, impulsó, financió y construyó el Megaproyecto "Renacer-Pineros", el Megaproyecto Cerro Caracol, el Proyecto San Luis, el Proyecto Alto Los Aromos y el Proyecto Caleta San Marcos, contribuyendo a dar habitabilidad y mejor calidad de vida a más de 1.300 familias en Tarapacá.

El reciente fallo sobre el campamento "Alto Molle", nos recuerda que gobernar no es solo hablar bonito y acumular promesas. Es gestionar, resolver y transformar la realidad de las personas. Y eso -como queda en evidencia- marca la enorme diferencia entre decir y hacer.

Alonso Velásquez Rodríguez,  
abogado  
magíster en Gestión y Políticas Públicas